

Cofinanciado por
la Unión Europea

Fondos Europeos

CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN**NÚMERO 1418/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Expte: AM-002/2023 (A/SER-045802/2022)-01-C0625

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

Examinados los documentos obrantes en el expediente procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Que Mediante Orden 2233/2023, de 11 de julio, Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se adjudicó el Acuerdo Marco de servicios de "ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL, COFINANCIADO PARCIALMENTE POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2021- 2027".

SEGUNDO. Que con fecha 5 de septiembre de 2023 se formalizó el mismo con la entidad Servicios Sociales Habilitadores para el centro ofertado por esta entidad, denominado "Centro Ocupacional Avantos" (C0625)

En el documento de formalización, se establecieron las siguientes condiciones:

- Nº de plazas: 66 plazas de atención intensiva y 8 plazas de apoyo y seguimiento laboral
- Precio/ plaza atención intensiva ocupacional (sin IVA): 42,95 €.
- El precio/plaza de apoyo y seguimiento laboral (sin IVA): 25,77 €.

TERCERO. Mediante Orden 2918/2023, de 27 de septiembre, se adjudicó un contrato basado por 66 plazas de atención intensiva en centro ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES, S.L., en el citado "Centro Ocupacional Avantos" C0625, por un importe de 1540.375,98 euros (4% IVA incluido), y con una duración desde 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.

CUARTO. Que con fecha de registro de entrada de 21 de marzo de 2024 la entidad adjudicataria, SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES, S.L., comunica mediante escrito que, debido a la falta de recursos económicos suficientes para mantener en funcionamiento su centro ocupacional indicando que ha decidido proceder al cierre del mismo el próximo 31 de mayo de 2024, lo que determinará, en consecuencia, el cese de la ejecución del Acuerdo Marco y del contrato basado para la totalidad de las plazas adjudicadas a la entidad por imposibilidad de continuar prestando los servicios de atención diurna ocupacional objeto de los mismos.

QUINTO. Que a partir de la comunicación del cierre del centro desde la Dirección General de Atención de Personas con Discapacidad, se han tomado las medidas oportunas al objeto de garantizar la atención que vienen recibiendo las 66 personas usuarias de este Centro, a través de su reubicación en plazas del resto de Centros adheridos al Acuerdo Marco de Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en Centro Ocupacional, en función de sus necesidades, a los efectos de causar el menor perjuicio posible en la atención que precisan estas personas usuarias.

SEXTO. Con fecha 10 de abril de 2024, se recibió informe de la Dirección General de Atención a



Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia. La propuesta de resolución se basa en el incumplimiento culpable de la obligación principal del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 211.1.f) de la LCSP y, por tanto, se propone el inicio de la resolución del contrato basado en esta dicha causa.

SÉPTIMO. Mediante Orden de 1286/2024, de 16 de abril, se acuerda el inicio del procedimiento de resolución del citado contrato.

OCTAVO. Mediante dictamen de 765/24 de 4 de diciembre de 2024, la Comisión Jurídica Asesora concluyó que procedía la retroacción del procedimiento para su correcta tramitación, concediendo el trámite de audiencia al avalista .

NOVENO. Mediante Orden 172/2025, de 12 de febrero, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se acordó la caducidad del procedimiento de resolución del acuerdo marco y de su contrato basado mencionado, por el transcurso del plazo de 8 meses establecido en la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, ordenándose el archivo de las actuaciones.

DECIMO: Mediante Orden 294/2025, de 18 de febrero, se acuerda el inicio del procedimiento de resolución del Acuerdo Marco de servicios denominado "ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL, COFINANCIADO PARCIALMENTE POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2021- 2027", adjudicado a la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. (NIF B85515633), y de su correspondiente contrato basado, por incumplimiento de la obligación contractual principal.

En este nuevo procedimiento de resolución contractual se acuerda la conservación del informe de 10 de abril de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia.

Asimismo, se acuerda conceder un nuevo trámite de alegaciones al contratista y al avalista para que, en el plazo de diez días naturales, formulen las alegaciones y presenten los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.

Pasado este plazo, ninguna de las dos entidades presenta alegaciones

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Hay que señalar que la caducidad declarada por Orden 172/2025, de 12 de febrero, no impide iniciar de nuevo el expediente de resolución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el nuevo procedimiento de resolución que se inició con la Orden citada Orden 295/2025, de 18 de febrero, en el que se conserve el informe de 10 de abril de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia. Se entiende que se trata de un trámite cuyo contenido se mantendría de igual forma si no se hubiera declarado la caducidad del procedimiento. No obstante, sí se le concedió un de nuevo el trámite de alegaciones al tanto al contratista como al avalista. En este nuevo procedimiento no se han presentado alegaciones por ninguna de las partes implicadas

SEGUNDO: De acuerdo con lo que establece el 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y tal y como refleja el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la ejecución de los contratos basados en el Acuerdo Marco se realizará a riesgo y ventura del contratista.

Asimismo, las condiciones suscritas en los documentos de formalización del acuerdo marco establece las obligaciones de las partes firmantes, obligándose la entidad a mantener disponibles las plazas ofertadas en los mismos por un periodo de 4 años. Posteriormente, en función de la necesidad de continuidad en la atención que se venía prestando a las personas usuarias de dichos centros y en función de la demanda de plaza en los mismos se suscribieron los contratos basados en dichos acuerdos marco por periodos iniciales de 24 meses.

El artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), concede al órgano de contratación la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Son los artículos 211, 212 y 213 de la LCSP los que regulan las causas de resolución, la aplicación de las mismas, así como sus efectos

TERCERO. En el supuesto que nos ocupa, el objeto del contrato basado del Acuerdo Marco de servicios de “ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL, COFINANCIADO PARCIALMENTE POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2021- 2027” consiste en poner a disposición de la Comunidad de Madrid 66 plazas de atención intensiva en centro ocupacional para la atención de personas adultas con discapacidad intelectual y situación de dependencia residentes en la Comunidad de Madrid en el Centro C0625 “Centro Ocupacional Avantos”, perteneciente a la entidad mencionada. En estas 66 plazas contratadas, de acuerdo por el PPT por el que se rige el citado acuerdo marco, se debe ofrecer una atención personalizada que incluye las siguientes prestaciones básicas:

- Área de habilitación personal y social.
- Área ocupacional.
- Área de inserción laboral.
- Otros servicios complementarios de transporte y comedor.

Por tanto, el cierre del centro citado, supone no seguir prestando el servicio de atención intensiva en centro ocupacional a los usuarios de estas 66 plazas, esto es, implica el incumplimiento de la obligación principal del contrato.

CUARTO. Incurre el contratista en una de las causas generales de extinción de los contratos, como es la regulada en el artículo 211.1.f) que establece que será causa de resolución el incumplimiento de la obligación principal del contrato. Se trata en definitiva de una resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista que, a partir del 1 de junio de 2024, deja unilateralmente de prestar el servicio cuando la vigencia del contrato se extendía hasta el 30 de septiembre de 2025.

QUINTO. De conformidad con el artículo 212.1 de la LCSP “la resolución del contrato se acordará

por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca”.

Por su parte, el artículo 213.3 LCSP establece que, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. En consecuencia, la incautación de la garantía depositada por la entidad opera de manera automática.

La incautación de la garantía opera como indemnización de los perjuicios que dicho incumplimiento contractual provoca al interés público, que es el de suspender la gestión de un centro ocupacional de 66 personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia.

Hay que señalar que la no continuidad en la prestación del servicio ha obligado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a organizar en el plazo de dos meses, (periodo comprendido entre la notificación del cierre del centro el 21 de marzo de 2024, y la efectividad de la medida el 31 de mayo de 2024) la reubicación de las 66 personas usuarias atendidos en el “Centro Ocupacional Avantos”, entre el resto de centro ocupacionales de la red concertada de atención a personas con discapacidad intelectual con las cuales la Consejería tiene plazas adjudicadas en virtud del Acuerdo Marco 002/2023.

Tal y como se establece en los PCAP, uno de los criterios prioritarios de adjudicación de plazas por la que se contrataron plazas con la entidad Servicios Sociales Habilitadores, era el relativo a dar continuidad a su atención: “...*De forma prioritaria se contratarán las plazas teniendo en cuenta los usuarios que ya están siendo atendidos en plaza pública en cada uno de los centros a fin de asegurar la continuidad de la atención...*”

La resolución del contrato con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES, S.L., supone un perjuicio para los usuarios y sus familias que tienen que trasladarse forzosamente de Centro por causas no imputables a ellos, y un perjuicio para la Administración.

Vista la propuesta de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, los informes que obran en el expediente, y en aplicación de los artículos 211, 212 y 213 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada

DISPONGO

PRIMERO. Acordar la resolución del Acuerdo Marco “ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL, COFINANCIADO PARCIALMENTE POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2021- 2027”, adjudicado a la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES, S.L., y de su correspondiente contrato basado, por incumplimiento de la obligación contractual principal.

Esta resolución deja sin efectos la medida cautelar de suspensión del contrato acordada en la Orden 294/2025, de 18 de febrero.

La resolución del contrato tendrá efectos desde el día siguiente a la notificación de esta Orden.



SEGUNDO. Acordar la incautación automática de la garantía definitiva constituida por el licitador, con resguardo nº 202355006154E, por importe total de 70.017,09 €, en aras a garantizar el pago del importe de los daños y perjuicios derivados de esta resolución.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra este acuerdo no procede la interposición de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que los interesados, según prevé el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puedan recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS
SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de
22/12/2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GOMEZ-TAVIRA GOMEZ-TAVIRA PABLO
Fecha: 2025.05.26 12:14